



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2021-00214-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD
DEMANDANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR
DEMANDADO: NOHORA NANCY TOVAR RIAÑO

En el presente asunto, la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR**, promueve demanda en contra de la señora NOHORA NANCY TOVAR RIAÑO, con el objeto de obtener la nulidad de la Resolución 10 del 06 de enero de 2015, por medio del cual se reliquida una asignación mensual de retiro, y la nulidad de la Resolución 3390 del 05 de junio de 2020, con la cual se da cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de septiembre de 2019, el cual confirma el fallo de primera instancia del Juzgado 30 Administrativo de Bogotá del 06 de septiembre de 2016.

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró en el Título V, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción.

Concretamente, el Capítulo III de la norma ibídem, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
4. *Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
5. *La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
6. *La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.*
8. *El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”*

Ahora bien, en cuanto a los actos administrativos que se pueden demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se debe tener en cuenta en primer lugar, que la ley 1437 de 2011 en su artículo 43, señala que “*Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.*”

Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta como primera medida, que existen varias clases de actos administrativos que puede proferir la administración, a saber, los actos de trámite o preparatorios, los definitivos y los de ejecución, sin embargo, no todos son susceptibles de ser demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para estudiar su legalidad, pues para ello, deben contar con una condición “*sine qua non*”, y es que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica.

En otras palabras, si los actos administrativos no son definitivos, es decir, si no contienen la manifestación de la voluntad de la administración con la cual se culmine con el procedimiento administrativo ante la entidad respectiva, tal como lo define el artículo 43 del C.P.A.C.A., no pueden demandarse bajo los medios de control que consagra la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda, en proveído adiado 25 de mayo de 2017, dentro del expediente 2012-00400, C.P. Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, hizo alusión a esta diferenciación entre las clases de actos administrativos, indicando lo siguiente:

“Se ha entendido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración, en ejercicio de la función administrativa,

*orientada a producir efectos jurídicos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, y, por ende, susceptible del control jurisdiccional. También puede ser impugnado en sede administrativa a través de los recursos de la vía gubernativa o por revocación directa. Sobre este último aspecto, los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establecen que «No habrá recursos contra los actos de carácter general, ni contra los **de trámite, preparatorios, o de ejecución** excepto en los casos previstos en norma expresa» y «Por regla general, contra los actos **que pongan fin a las actuaciones administrativas** procederán los siguientes recursos: [...] Son **actos definitivos**, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla» (...)*

(Negrilla fuera del texto original).

Para complementar, mediante Sentencia 00343 de 2017 del Consejo de Estado, se estableció que en los actos de ejecución “(...) *no se contiene una expresión de voluntad proveniente de la administración, sino la orden concreta de un juez que para cobrar ejecución requiere de su puesta en práctica por la autoridad que está obligada a cumplirla. Es entonces, el instrumento jurídico a través del cual la administración materialmente cumple la orden dada por un funcionario judicial dentro de una providencia.*” Igualmente, resalta que dicho acto carece de control por vía de acción, adecuándose a lo anteriormente mencionado y a lo establecido en el artículo 75 del C.P.A.C.A.

Así pues, conforme a lo señalado tanto por el legislador como por el H. Consejo de Estado, es claro que los actos de ejecución no son susceptibles de control jurisdiccional, pues están destinados a dar cumplimiento a un fallo judicial, lo cual impide que se realice un estudio de legalidad, pues en este tipo de actos no se concreta una función que pueda ser cuestionada o revisada.

En este orden de ideas, al analizarse el acto administrativo que se censura en el presente asunto, siendo este la Resolución 3390 del 05 de junio de 2020, es claro para el Despacho que se trata de un acto de ejecución, no susceptible de control jurisdiccional, por lo siguiente.

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece los tipos de providencias que se profieren en el curso de los procesos judiciales, bajo el siguiente contenido normativo:

“Artículo 278. Clases de providencias. *Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.”

Dentro del acto acusado, quedó expuesto que el Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá emitió sentencia dentro del proceso 11001-33-35-

030-2015-00771, siendo confirmado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F”, declarando la nulidad de la Resolución 880 de 13 de febrero de 2015, e impartiendo la orden a la Caja de Sueldos de la Policía Nacional –CASUR, de seguir pagando la asignación de retiro a la señora Nohora Nancy Tovar Riaño.

Para dar cumplimiento a la anterior providencia judicial debidamente ejecutoriada, CASUR profirió la Resolución No. 3390 del 05 de junio de 2020, mediante la cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, da cumplimiento a una orden judicial.

Continuando con el análisis del caso, es preciso indicar que el acto administrativo contenido en la Resolución No. 3390 del 5 de junio de 2020, además de dar cumplimiento a la decisión proferida en primera y segunda instancia, también dispuso el pago de los valores causados acorde a la orden impartida en sentencia y ordenó la inclusión en nómina de la reliquidación de la asignación mensual de retiro de la señora Tovar Riaño, por lo que es claro, se itera, que el acto acusado constituye un acto administrativo de ejecución, que no es pasible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos expuestos en la demanda, pues el mismo fue la concreción de la orden impartida en la instancia jurisdiccional, ordenando la nulidad del acto administrativo y consecuente pago de la asignación mensual, acorde a los parámetros descritos en la Orden Judicial.

Corolario de lo anterior, es del caso **RECHAZAR LA DEMANDA** en relación a la Resolución 3390 del 05 de junio de 2020, pues el acto acusado no contiene una decisión a cuestionar o revisar, y al ser un acto de ejecución, no es objeto de control por la jurisdicción contenciosa administrativa, pues esta Resolución obedece al acatamiento de una orden proferida por una autoridad, frente al cual no es procedente controvertir las motivaciones y órdenes impartidas, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 3° que se rechazará la demanda “Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.”

Ahora bien, frente a la declaratoria de nulidad de la Resolución 10 de 06 de enero de 2015, el Despacho encuentra que una vez estudiado el escrito de demanda y sus anexos, establece que no es posible admitirla, por lo cual, dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011, el decreto 806 de 2020 y la ley 2080 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ LA DEMANDA**, por las siguientes razones:

1. Acreditación de envío de copia de la demanda y sus anexos:

Se informa que mediante el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, se dispuso que:

“(…) En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda,

simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. (...)

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado”.

Subraye fuera del texto original.

Consecutivamente, el artículo 162 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, indica frente al contenido de la demanda:

“Artículo 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado”.

Por lo anterior, se informa que no se evidencia correo o documento alguno que demuestre que cumplió con el artículo 6 del Decreto 806 de 2020 y el numeral 8 del artículo 35 la Ley 2080 de 2021, por lo tanto, es necesario que se demuestre dicho requisito en el tiempo establecido para la subsanación.

Así las cosas, la demanda presentada por la apoderada judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012, Decreto 806 de 2020 y Ley 2080 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO.- RECHAZAR la demanda interpuesta por la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR**, en contra de la señora **NOHORA NANCY TOVAR RIAÑO**, en relación con la Resolución 3390 del 05 de junio de 2020, y conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR**, en contra de la señora **NOHORA NANCY TOVAR RIAÑO**, respecto de la nulidad de la Resolución 10 del 06 de enero de 2015.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá llegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AJR

Firmado Por:

Andres Jose Gnecco
Juez Circuito
Sala 026



JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **08 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA

Quintero

Contencioso

Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1ccffbb708d106b4b82d4f0b11b76de9242fd99ed15cb0079d5ac3af3a29e661
Documento generado en 07/09/2021 03:31:32 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>